



Asamblea General

Distr. general
15 de septiembre de 2009
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal
Sexto período de sesiones
Ginebra, 30 de noviembre a 11 de diciembre de 2009

Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos

Eritrea*

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones¹ presentadas por 17 interlocutores para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que el primer ciclo del examen abarca cuatro años.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. Antecedentes y marco

A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. En la comunicación conjunta 1 se observó que Eritrea había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos), y que debía presentar la mayoría de los informes a los órganos de tratados de las Naciones Unidas². Human Rights Watch (HRW) recomendó al Gobierno de Eritrea que firmara y ratificara el Estatuto de Roma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y los Protocolos facultativos primero y segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³. La Iniciativa pro justicia del Open Society Institute (OSJI) recomendó a Eritrea que considerara la posibilidad de adherirse a los dos tratados sobre la apatridia⁴.

B. Marco constitucional y legislativo

2. En la comunicación conjunta 1 se señaló que el Gobierno de Eritrea venía utilizando la Proclamación del Código Penal de transición de 1957 como documento "provisional" desde hacía 18 años⁵ y que el país se regía por una serie de declaraciones y proclamaciones unilaterales⁶. Añadió que una Asamblea Constituyente ratificó en 1997 una Constitución que se ha dejado de lado desde su aprobación⁷. La Constitución preveía distintos tipos de protección en materia de libertad religiosa, según el European Centre for Law and Justice (ECLJ)⁸. Open Doors International (ODI) opinó que en esa Constitución se fijaban restricciones al derecho a la libertad de religión o creencias⁹. HRW recomendó al Gobierno que aplicara la Constitución, aprobara una ley de partidos políticos y empezara a preparar elecciones democráticas bajo supervisión internacional¹⁰.

II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

3. En la comunicación conjunta 1 se afirmó que el Gobierno era abiertamente hostil a todos los mecanismos de derechos humanos, que consideraba como violaciones inapropiadas de la soberanía de Eritrea¹¹. HRW recomendó al Gobierno que cursara a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas una invitación permanente para investigar e informar sobre las denuncias de abusos graves en Eritrea¹².

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

4. ODI declaró que la Constitución otorgaba derechos iguales a ambos sexos y que la cultura tradicional era una de las principales causas de discriminación contra la mujer. Sexual Rights Initiative (SRI) señaló que gran parte de la sociedad seguía siendo tradicional y patriarcal y que la condición de la mayoría de las mujeres en los hogares y comunidades era inferior a la de los hombres. Los hombres conservaban un acceso privilegiado a la educación, el empleo y el control de los recursos económicos, con mayores desigualdades en las zonas rurales¹³. SRI informó de que en Eritrea diversas prácticas tradicionales atentaban contra el bienestar de las niñas, como el matrimonio precoz, la dote y la poligamia¹⁴.

5. OSJI recomendó a Eritrea que velara por que ningún ciudadano se viera privado de su nacionalidad por motivos raciales; que dispusiera vías de revisión judicial y recursos efectivos para todos los casos de privación de nacionalidad, y que dispensara el mismo trato a los ciudadanos de nacimiento que a los naturalizados en todo lo referente a la privación de la nacionalidad¹⁵. También recomendó a Eritrea que enmendara su Ley de nacionalidad para garantizar la no discriminación en el acceso a la ciudadanía y, en particular, que aboliera todas las disposiciones directa o indirectamente discriminatorias por motivos de discapacidad; que enmendara su Ley de nacionalidad para que los niños apátridas nacidos en su territorio pudieran adquirir la nacionalidad eritrea, y que concediera la ciudadanía a los apátridas con residencia permanente en Eritrea, ya fueran originarios de un país vecino o hubieran llegado físicamente desde ese país y no hubieran adquirido la ciudadanía de ningún otro Estado¹⁶.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

6. HRW informó de que el Gobierno de Eritrea era responsable de ejecuciones extrajudiciales y que se cometían ciertos asesinatos deliberados de reclusos, aunque la mayoría se producía cuando los presos intentaban fugarse de centros de reclusión o huir del país¹⁷. Según Eritreans for Human and Democratic Rights-United Kingdom (EHDR-UK)/Release Eritrea (RE), en julio de 2005 se informó de que hasta 161 jóvenes habían sido acibillados a balazos mientras intentaban huir del campamento militar de Wi'a. El Gobierno nunca reconoció el incidente, y las familias no conocen el destino de sus familiares muertos¹⁸.

7. En la comunicación conjunta 1 se informó de que había miles de presos que no habían sido formalmente acusados y habían desaparecido¹⁹. Amnistía Internacional añadió que era muy difícil conseguir información sobre personas que "desaparecían" y quedaban detenidas en secreto²⁰. HRW también señaló que algunas familias finalmente llegaban a conocer el destino de sus familiares cuando se les informaba de su muerte en prisión (no así de las causas de su muerte)²¹. Amnistía Internacional indicó además que las familias se exponían a represalias de las autoridades si solicitaban información sobre una detención o se ponían en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos²². HRW recomendó al Gobierno que permitiera de inmediato el acceso de observadores independientes a todos los centros de detención conocidos y secretos del país, creara un registro sobre el paradero de los detenidos y notificara a sus familiares y restableciera el derecho de visita, el acceso a asistencia letrada y la observancia de las normas del derecho internacional en materia de tratamiento de los reclusos²³. La comunicación conjunta 1 recomendó que se investigaran todos los casos de desaparición y se llevara ante la justicia a los responsables de muertes extrajudiciales²⁴.

8. La Federación Internacional de PEN Clubs expresó su grave preocupación por la salud y el bienestar de todos los reclusos y afirmó que se les negaba el derecho a recibir visitas de sus familiares, que había motivos para creer que también se les negaba atención médica, y que buen número de ellos padecía condiciones de detención muy duras y torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes²⁵. HRW señaló que las muertes de reclusos eran frecuentes de resultas de los malos tratos, la tortura, el hambre y la denegación de atención médica²⁶. HRW recomendó al Gobierno que investigara y procesara a todos los funcionarios, incluidos los oficiales del ejército, sospechosos de asesinar, violar, torturar o infligir tratos crueles y degradantes a detenidos o reclutas²⁷. Amnistía Internacional pidió al Gobierno que pusiera fin de inmediato a las torturas y otros malos tratos, iniciara investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura u otros malos tratos infligidos a presos y llevara a los autores ante la justicia de conformidad con las normas internacionales sobre juicios imparciales²⁸.

9. Amnistía Internacional recibió información sobre personas que habían sido torturadas para forzarlas a renegar de su fe o castigarlas por llevar a cabo actividades religiosas durante su detención. Añadió que por lo general las condiciones penitenciarias solían ser duras, las celdas y demás lugares de reclusión presentaban problemas de hacinamiento, humedad y falta de higiene, y los presos solían estar desnutridos y carecer de agua potable²⁹. Amnistía Internacional recibió información sobre presos religiosos muertos por las duras condiciones de detención y el trato recibido, o por no haber recibido atención médica para tratar enfermedades curables³⁰.

10. Amnistía Internacional afirmó que al menos 11 ex ministros y veteranos de la liberación de Eritrea que se habían pronunciado a favor de aplicar reformas democráticas y mejorar la situación de los derechos humanos permanecían recluidos en secreto tras ser detenidos el 18 de septiembre de 2001. Conocidos como el G-15, nunca han sido acusados ni han comparecido ante un tribunal. La Federación Internacional de PEN Clubs³¹, EHDR-UK/RE³² y HRW³³ presentaron información análoga. Amnistía Internacional señaló que el Gobierno nunca había revelado el paradero exacto de esas personas ni informado acerca de su estado de salud y que, según las informaciones recibidas, al menos 1 de los 11 había muerto en prisión como consecuencia de las duras condiciones de detención y de la falta de atención médica³⁴. EHDR-UK/RE recomendaron que se liberara a todos los presos políticos, entre ellos el G-15 y los periodistas³⁵.

11. SRI afirmó que la mutilación genital femenina era generalizada y que la practicaban casi todos los grupos étnicos y religiosos³⁶. Recomendó que el Gobierno prosiguiera sus actividades educativas a fin de erradicar esa práctica, la tipificara como delito en el Código Penal y pusiera en marcha los programas necesarios para asistir a las víctimas; y que las organizaciones internacionales y los donantes respaldaran la labor de la sociedad civil en este campo³⁷.

12. SRI señaló que el Gobierno había adoptado una posición pública firme contra la violencia doméstica, en especial contra la costumbre de golpear a las mujeres, muy extendida, y que la violación marital no estaba categóricamente prohibida en Eritrea³⁸. Añadió que mujeres y niñas estaban expuestas a la violencia sexual dentro de la comunidad y que las niñas también eran víctimas de actos violentos de agentes estatales en el contexto del recurrente conflicto armado con un país vecino. SRI señaló que según sus informaciones se había utilizado en combate a niños soldados, entre ellos niñas, en violación de las normas internacionales³⁹. Conscience and Peace Tax International (CPTI) afirmó que la situación de la mujer en el ejército había empeorado radicalmente y que en 2004 la percepción de que se sometía a las mujeres reclutas a esclavitud sexual había originado violentos enfrentamientos con los oficiales de reclutamiento del ejército en algunas comunidades musulmanas. CPTI agregó que la práctica de la violación estaba al

parecer muy extendida y provocaba frecuentes embarazos, que daban lugar a exención de las obligaciones militares pero también al consiguiente estigma social⁴⁰.

13. SRI observó que, en general, el Gobierno no había logrado proteger a las mujeres de la violencia⁴¹ y le recomendó que tipificara como delito la violación dentro del matrimonio; llevara a cabo campañas públicas de sensibilización sobre la violación como delito para que las víctimas y sus familias se atrevieran a hacer las denuncias del caso; modificara la legislación pertinente para que dejaran de retirarse los cargos cuando el violador se casara con la víctima; se tomaran de inmediato medidas para detener la práctica del reclutamiento de niños como soldados, se investigara y sancionara debidamente a los responsables y se asistiera a las víctimas⁴².

14. Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIEACP) informó de que el castigo corporal era una práctica legal en el hogar⁴³ y en otros entornos de cuidado de niños en virtud del "derecho de corrección" dispuesto en el Código Penal de Transición⁴⁴. Un código de conducta establecía que no debía recurrirse al castigo corporal en las escuelas, pero no lo prohibía expresamente⁴⁵. GIEACP señaló que no había podido determinar la legalidad del castigo corporal como medida disciplinaria en instituciones penales y que si bien, en virtud del artículo 172 del Código Penal de Transición, era legal en el sistema penitenciario como condena por un delito, quedaba abolido en el proyecto de código penal⁴⁶.

15. Según HRW, los eritreos que criticaban al Presidente o cuestionaban las políticas del Gobierno, profesaban una religión que el Gobierno considera inaceptable, o intentaban eludir el "servicio nacional" obligatorio, de duración prolongada e indefinida, eran frecuentemente detenidos y encarcelados durante años sin cargos ni juicio. HRW agregó que se estimaba que miles de eritreos —quizás decenas de miles— se encontraban actualmente presos en diversos centros de detención tanto conocidos como secretos⁴⁷.

16. HRW también declaró que miles de personas de menor relevancia pública habían sido detenidas y encarceladas sin cargos, juicio, posibilidad de apelar, ni contacto con sus familiares, abogados u organizaciones independientes de supervisión penitenciaria⁴⁸. EHDR-UK/RE añadieron que cualquier "funcionario" podía detener a una persona y que era prácticamente imposible averiguar las razones exactas de una detención o incluso el paradero del detenido. Informaron de que las diversas fuerzas de seguridad del Presidente, los cuerpos de Seguridad Nacional o los generales podían detener a una persona, que dichas detenciones se llevaban a cabo fuera del sistema judicial ordinario y que los tribunales civiles, incluido el Tribunal Supremo, no podían intervenir⁴⁹. En la comunicación conjunta 1 se declaraba que el Gobierno debía poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias⁵⁰.

3. Administración de justicia, incluido el concepto de inmunidad, y estado de derecho

17. En la comunicación conjunta 1 se mencionó que la mayoría de las detenciones extrajudiciales obedecían a motivos políticos y que el tribunal especial encargado de resolver dichos casos estaba compuesto por jueces pertenecientes a las altas esferas del Frente Popular para la Democracia y la Justicia⁵¹. Según EHDR-UK/RE este tribunal especial, creado por el Presidente con el supuesto objetivo de luchar contra la corrupción, violaba los principios básicos de la justicia. Presidido por tres oficiales del ejército sin formación jurídica, sus decisiones eran definitivas y podían revocar las resoluciones de cualquier otro tribunal. Los juicios celebrados ante este tribunal no guardaban conformidad con las normas internacionales sobre juicios imparciales⁵². CSW/HRCE proporcionaron información semejante⁵³. EHDR-UK/RE recomendaron que se disolviera el tribunal especial y se liberara a todos los presos condenados por él hasta que un tribunal internacionalmente reconocido revisara todas sus decisiones⁵⁴.

18. En la comunicación conjunta 1 se declaró que Eritrea se dividía en comandancias militares paralelas a las regiones administrativas civiles, que el ejército controlaba totalmente los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a partir de los niveles más bajos, y que los casos de delitos considerados graves se ponían en manos de las jefaturas de brigada. Los coroneles y grados superiores tenían autoridad para dictar sentencias de muerte y ejecutar a soldados por tentativa de fuga, abandono de la posición o simplemente por "cobardía"⁵⁵. En la comunicación conjunta se precisó que la justicia no debía quedar bajo el control del Gobierno, que este debía fijar normas claras para definir las medidas adoptadas por la policía, especialmente en materia de detención, y que las fuerzas armadas no debían desempeñar funciones policiales civiles, que debían estar bajo el control de la justicia⁵⁶.

4. Derecho a la privacidad, al matrimonio y a la vida familiar

19. En la comunicación conjunta 1 se señaló que la gente no confiaba en nadie, exceptuando a los familiares más próximos, presumía que sus teléfonos estaban intervenidos y se comunicaba verbalmente en código⁵⁷. En la comunicación conjunta 1 se solicitó al Gobierno que dejara de espiar a los ciudadanos de Eritrea dentro y fuera del país⁵⁸.

20. En la comunicación conjunta 1 se señaló que debido al servicio militar sin fin era imposible para la población hacer planes matrimoniales y familiares de cualquier tipo⁵⁹, y se pidió al Gobierno que adoptara normas objetivas respecto del servicio militar obligatorio de modo que los jóvenes pudieran hacer planes matrimoniales y familiares⁶⁰.

21. En la comunicación conjunta 2 se observó que Eritrea mantenía las sanciones penales para las actividades sexuales consensuales entre personas del mismo sexo⁶¹, y se le recomendó que enmendara su legislación para hacerla compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derogara a tal efecto todas las disposiciones que penalizaban las actividades sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo⁶².

5. Libertad de circulación

22. Según HRW, Eritrea limita severamente la circulación de sus ciudadanos dentro y fuera del país y exige a todos los reclutas que cumplen el servicio militar obligatorio un permiso escrito para viajar dentro del país. Los puestos de control militares dispuestos a lo largo de todas las carreteras controlan los permisos de viaje para asegurarse de que los viajeros hayan sido debidamente autorizados, y se exige la presentación de documentos de identidad en cada puesto de control, incluso a los ciudadanos eritreos que no tienen obligaciones militares. HRW declaró que el Gobierno no emitía documentos de viaje o visados de salida para eritreos aptos para el servicio militar y que no se permitía la salida de Eritrea de niños mayores de 14 años⁶³. Amnistía Internacional mencionó los casos de por lo menos cuatro periodistas encarcelados desde 2005 por intentar entrar en dos países vecinos⁶⁴.

6. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

23. Amnistía Internacional puso de relieve que los fieles de grupos religiosos prohibidos corrían el riesgo de ser detenidos y encarcelados en régimen de incomunicación y que Eritrea solo reconocía oficialmente cuatro confesiones religiosas: las iglesias ortodoxa, católica y luterana y el islam. Añadió que en 2002 el Gobierno había prohibido todos los grupos religiosos minoritarios y que se estimaba que más de 3.000 miembros de grupos religiosos minoritarios estaban detenidos sin cargos ni juicio y, a menudo, sometidos a torturas u otros malos tratos⁶⁵. ODI⁶⁶, Jubilee Campaign (JC)⁶⁷ y el Institute on Religion and Public Policy (IRPP)⁶⁸ presentaron información semejante. Este último afirmó que una

mayoría de agentes gubernamentales y no gubernamentales consideraba que la situación de la libertad religiosa en Eritrea era una de las peores del mundo⁶⁹.

24. HRW agregó que los testigos de Jehová enfrentaban un elevado nivel de discriminación. Informó que después de que no votaron en un referéndum sobre la independencia en 1993 y en razón de la prescripción religiosa que les impedía cumplir el servicio militar, el Gobierno de Eritrea los había despojado en efecto de su ciudadanía⁷⁰. La Asociación Europea de Testigos Cristianos de Jehová (EAJCW) informó de que muchas de las personas detenidas por negarse a alistarse en el ejército habían sido brutalmente golpeadas⁷¹. Señaló que se prohibía trabajar en la administración pública a los testigos de Jehová, se revocaban sus licencias comerciales y se les retiraban los documentos de identidad y de viaje⁷². Declaró que en la actualidad estaban en la cárcel por sus creencias religiosas 42 testigos de Jehová⁷³. Amnistía Internacional proporcionó información similar⁷⁴.

25. EAJCW exhortó a las autoridades a que adoptaran sin demora medidas efectivas para proteger la libertad de religión de los testigos de Jehová y pusieran en libertad a todos los detenidos; también les instó a que permitieran a una delegación de testigos de Jehová visitar Eritrea y reunirse personalmente con el Presidente Afewerki a fin de aclarar posibles malentendidos y solucionar esas cuestiones de forma pacífica⁷⁵. HRW recomendó al Gobierno que dictara órdenes públicas claras a las fuerzas de seguridad para que cesaran las detenciones, los encarcelamientos y las torturas arbitrarias por motivos de religión⁷⁶.

26. IRPP puso de relieve que el Gobierno interfería en el funcionamiento cotidiano de los grupos religiosos reconocidos, al más alto nivel, y que la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Católica Romana y la comunidad musulmana habían padecido los abusos e injerencias del Gobierno en sus asuntos religiosos, el que exigía a las cuatro religiones oficialmente reconocidas que presentaran informes sobre sus fuentes de financiación, así como una lista completa de su personal y patrimonio⁷⁷.

27. Amnistía Internacional informó de que el Gobierno había hecho público el 27 de mayo de 2007 el nombramiento de un nuevo patriarca, a pesar de que las normas de la Iglesia ortodoxa prohibían designar a un nuevo patriarca en vida del anterior⁷⁸. HRW⁷⁹ IRPP⁸⁰ dieron información similar. Según Amnistía Internacional, las autoridades habían detenido a un grupo de musulmanes por oponerse a la designación del Gran Muftí, y por lo menos 40 clérigos y eruditos musulmanes del grupo étnico saho habían sido detenidos en la mitad de la noche los días 13 y 14 de agosto de 2008 y trasladados en vehículos no identificados⁸¹.

28. ODI instó al Gobierno a que revisara las leyes relativas a grupos y organizaciones religiosas y se cerciorara de que cumplieran las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recomendó que se estableciera un proceso de registro transparente y pidió al Gobierno que reconociera lo antes posible a los solicitantes⁸². IRPP recomendó que el ejército modificara el trato dispensado a los grupos religiosos y concediera igualdad de trato y libertades a todas las personas, independientemente de su credo religioso, y que el Gobierno autorizara la existencia pública y libre de más de cuatro comunidades religiosas en el país⁸³.

29. A juicio de IP, Eritrea es el único país africano sin prensa privada, donde el Estado controla todos los medios de difusión. Hay más periodistas encarcelados en Eritrea que en cualquier otro país africano⁸⁴. Amnistía Internacional informó de que el Estado no había permitido la existencia de prensa independiente o privada tras el cierre de todos los medios de difusión independientes a finales de septiembre de 2001 y la detención de diez periodistas que protestaban contra dicho cierre en la misma época⁸⁵. La comunicación conjunta 1 dio información análoga⁸⁶. IP estimó que la explicación más plausible de la ofensiva contra la prensa era que se trataba de un intento de acabar con la disidencia

política. Señaló que se habían congelado las cuentas bancarias y confiscado los bienes de todos los periodistas detenidos⁸⁷. Amnistía Internacional informó de que dichos periodistas estaban incomunicados, nunca habían sido acusados ni habían comparecido ante un tribunal de justicia, y el Gobierno se había negado a revelar su paradero y estado de salud⁸⁸. Según IP, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos había dictaminado en mayo de 2007 que la detención de esos periodistas era arbitraria e ilegal y había instado al Gobierno a poner en libertad e indemnizar a los detenidos. Sin embargo, el Gobierno de Eritrea todavía no ha cumplido con lo dispuesto en esa resolución⁸⁹. Amnistía Internacional informó de que había motivos para creer que cuatro de los periodistas habían muerto en prisión⁹⁰. IP dio información análoga⁹¹.

30. Según Amnistía Internacional, el Gobierno ejerce un estricto control sobre todos los medios de comunicación desde 2001 y sigue reprimiendo cualquier discrepancia percibida en los medios de difusión del Estado⁹². STP y CSW/CDH-Eritrea⁹³ revelaron que el 22 de febrero de 2009 las autoridades gubernamentales habían ordenado una redada en las instalaciones de Radio Bana y detenido a todo su personal, compuesto por unos 50 periodistas, que fueron trasladados al centro de detención Dobozi en Asmara. Algunos fueron puestos en libertad, pero otros seguían detenidos⁹⁴. Amnistía Internacional indicó que no se había dado a conocer el motivo de su detención ni se les había acusado de ningún delito⁹⁵. En la comunicación conjunta 1 se destacó que se censuraba a los periodistas extranjeros y con frecuencia se los expulsaba del país por enviar artículos sin el visto bueno del Gobierno, que controlaba la totalidad de medios de radio, televisión y prensa, e incluso seguía de cerca las comunicaciones en Internet⁹⁶.

31. Amnistía Internacional exhortó al Gobierno a que pusiera en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los presos detenidos únicamente por sus convicciones políticas, religiosas o de otro tipo; acusara de delitos claramente reconocibles a todos los demás presos y los juzgara ante un tribunal de conformidad con las normas internacionales sobre juicios imparciales; precisara los nombres, paradero y estado de salud de todos los detenidos y confirmara los casos de muerte en prisión; autorizara de inmediato el acceso total y sin condiciones previas del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos los detenidos, y permitiera que todos los reclusos recibieran la asistencia letrada de su elección, visitas de sus familiares y la atención médica necesaria⁹⁷. IP formuló recomendaciones similares y exhortó al Gobierno a que cumpliera los compromisos contraídos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos poniendo fin a la detención de escritores y periodistas y permitiendo la reaparición de medios de difusión independientes⁹⁸.

32. CSW/HRCE señaló que no se permitía actuar en territorio eritreo a las organizaciones de derechos humanos y los defensores de los derechos humanos⁹⁹. En la comunicación conjunta 1 se añadió que las organizaciones de derechos humanos de la diáspora eritrea habían sido declaradas enemigas del Estado y sufrían el hostigamiento de los partidarios del Gobierno¹⁰⁰. Mencionó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras estaban prácticamente proscritas so pretexto de la "autosuficiencia"¹⁰¹. El Gobierno no había entablado consultas ni diálogo alguno con la sociedad civil con ocasión del EPU¹⁰². En la comunicación conjunta 1 se afirmó que el Gobierno debía aceptar la presencia activa de grupos de derechos humanos en Eritrea, proteger las actividades independientes de promoción de los derechos humanos y poner fin al hostigamiento que sufrían los defensores de los derechos humanos¹⁰³. ODI recomendó que el Gobierno aboliera las restrictivas leyes relativas a las ONG para que la sociedad civil pudiera organizarse y hacerse oír¹⁰⁴.

33. Christian Solidarity Worldwide (CSW)/Human Rights Concern-Eritrea (HRCE) declararon que desde la época de la independencia había gobernado Eritrea el partido Frente Popular para la Democracia y la Justicia, Gobierno provisional presidido por Isaias

Afewerki. Según estas organizaciones, hasta la fecha no ha habido elecciones y los partidos opositores están prohibidos. El partido no había celebrado su propio congreso desde el año 1994, y los años siguientes se habían caracterizado por una creciente represión¹⁰⁵. La comunicación conjunta 1 daba información análoga¹⁰⁶.

34. HRW dijo que estaba prohibida cualquier organización política con excepción del Frente Popular para la Democracia y la Justicia y que sabía por testigos presenciales que actitudes tan inocuas como firmar una petición en pro de cambios en la política educacional desembocaban en detenciones y palizas. HRW dijo que el Gobierno prohibía la formación de asociaciones privadas que no estuvieran bajo su dirección y control, incluidos sindicatos y organizaciones de autoayuda, y que para hacer reuniones de más de tres personas era necesario tener autorización gubernamental, prohibición esta que afectaba especialmente a las prácticas religiosas¹⁰⁷. CSW/HRCE presentaron información semejante¹⁰⁸.

35. Según Amnistía Internacional, las autoridades eritreas detienen con frecuencia a presuntos detractores del Gobierno; hay poca tolerancia de las opiniones divergentes y no se permite la creación de foros para la expresión independiente de opiniones o para la acción política¹⁰⁹. La Asociación para la defensa de los pueblos amenazados mencionó la detención de 3 estudiantes en un cibercafé de Asmara el 26 de diciembre de 2008 por visitar sitios web de la oposición, y de unos 40 líderes comunitarios, en septiembre de 2008, que habían criticado públicamente la política económica del Gobierno¹¹⁰. EDHR-UK/RE recomendaron al Gobierno que se comprometiera a establecer un plan preciso para celebrar sin demora elecciones libres, limpias y con plena participación de todas las fuerzas políticas de Eritrea¹¹¹.

7. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

36. Según la comunicación conjunta 1, los funcionarios de todos los aparatos de seguridad del Estado eran ex combatientes, y el reducido sector privado se encontraba en manos y bajo la dirección de partidarios y simpatizantes del partido gobernante¹¹². Al monopolizar todos los ámbitos de la vida, el Gobierno niega a la población el derecho a la iniciativa empresarial y a la creación de riqueza. Por otra parte, es prácticamente imposible entrar en el mercado debido al monopolio de la Red Sea Trading Corporation, brazo económico del partido, sobre el transporte marítimo, los seguros, la banca, el transporte, la comunicación, la pesca, la agricultura, la minería, la construcción e incluso el comercio al por menor¹¹³. CSW/HRCE¹¹⁴ proporcionaron información análoga. En la comunicación conjunta 1 se afirmó que no había derechos laborales ni sindicatos libres para defenderlos y que en 2005 habían sido detenidos varios dirigentes sindicales¹¹⁵. Se señaló que el Gobierno debía autorizar actividades económicas libres e independientes, especialmente cuando se tratara de iniciativas de ciudadanos eritreos, independientemente de que residieran o no en el país¹¹⁶.

37. CPTI afirmó que Eritrea venía alistando tanto a hombres como a mujeres para que cumplieran el servicio militar mediante operaciones periódicas de reclutamiento desde mayo de 1994 y que en virtud de la "Proclamación sobre el servicio militar" todas las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años tenían obligación de cumplir el servicio militar, compuesto por 6 meses de instrucción militar seguidos por 12 meses de servicio militar "activo" o de servicio para el desarrollo nacional bajo control del ejército, además de las obligaciones propias de los reservistas, que se extendían hasta la edad de 50 años. Sin embargo, señaló que en situaciones de movilización militar o de guerra, no solo podía llamarse a filas a los reservistas sino que el servicio militar "activo" podía prolongarse indefinidamente¹¹⁷.

38. En la comunicación conjunta 1 se reveló que decenas de miles de jóvenes habían sido reclutados por tiempo indefinido, y que cuando cumplían su servicio militar activo quedaban asignados al servicio obligatorio de "desarrollo nacional"¹¹⁸. HRW recomendó al

Gobierno que pusiera fin a la práctica del servicio militar indefinido, iniciara un proceso de desmovilización gradual para las personas que hubieran prestado servicio durante más de los 18 meses reglamentarios y dejara de asignar a los reclutas del servicio militar a trabajos forzados en empresas privadas¹¹⁹. CSW/HRCE recomendaron al Gobierno que garantizara el respeto de la objeción de conciencia y estableciera modalidades no punitivas de servicio civil alternativo¹²⁰.

39. En la comunicación conjunta 1 se añadió que el Gobierno no reconocía la libertad de trabajo y de generar ingresos personales y consideraba los recursos humanos como activos nacionalizados de los que podía disponer al igual que de cualquier otra propiedad¹²¹. CPTI indicó que eludir las obligaciones militares o intentar eludir las por cualquier medio se sancionaba con una multa y dos años de cárcel¹²², y que los eritreos que salían del país para eludir el servicio militar y retornaban pasados los 40 años de edad podían ser sancionados con una pena de 5 años de reclusión o hasta que cumplieran los 50 años si ese período resultaba ser más largo. Quienes se encontrasen todavía en edad de reclutamiento militar al regresar no solo debían cumplir el servicio militar sino que quedaban sujetos al castigo militar¹²³.

40. HRW dijo que el Gobierno castigaba a los familiares de quienes huían de sus obligaciones militares o del país, independientemente de que fueran conscientes de los actos de sus parientes o tuvieran o no control sobre ellos. Los familiares eran multados con sumas muy elevadas y sistemáticamente encarcelados en caso de impago. CSW/HRCE¹²⁴ dieron información análoga. HRW agregó que en algunos casos se confiscaban las tierras de las familias y que el Gobierno también detenía a los eritreos con familiares residentes en el extranjero que no hubieran pagado el impuesto sobre la renta extraterritorial que Eritrea intentaba imponer a los eritreos residentes en el extranjero, el denominado "impuesto del 2%"¹²⁵. CPTI¹²⁶ y CSW/HRCE¹²⁷ dieron información análoga.

8. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

41. CSW/HRCE señalaron que el Gobierno había empezado a monopolizar la distribución de alimentos y que la mayoría de la población dependía de la ayuda alimentaria y financiera, ayuda que el Gobierno rechazaba por temor a perder el control de la población en beneficio de elementos extranjeros. CSW/HRCE informaron de que la mayoría de las ONG internacionales habían sido expulsadas y que las que permanecían en el país habían quedado sujetas a restricciones innecesarias y estrictas. Señalaron que, como consecuencia de ello, los alimentos se estaban convirtiendo en uno de los principales instrumentos de control social y que en estos momentos una verdadera hambruna hacía estragos en toda Eritrea. Según estas organizaciones, el Gobierno había rechazado la ayuda alimentaria de los donantes y había optado por una ayuda de "dinero por trabajo", de la que venía apropiándose indebidamente y sin rendir ningún tipo de cuentas¹²⁸; el Estado administraba los únicos puntos de venta legales de alimentos, donde vendía pequeñas cantidades de alimentos a precios exagerados¹²⁹.

42. EDHR-UK/RE señalaron que el número de mendigos en las calles de las principales ciudades había aumentado visiblemente y que la negativa del Gobierno a aceptar ayuda alimentaria y humanitaria estaba provocando la aparición de miles de nuevos indigentes e incluso había noticias de muertes por hambre¹³⁰. EDHR-UK/RE recomendaron al Gobierno que permitiera la entrada de ayuda humanitaria y su rápida distribución entre los más necesitados¹³¹. HRW recomendó al Gobierno que invitara a organismos humanitarios independientes e imparciales a evaluar las necesidades humanitarias y les diera acceso ilimitado a los civiles necesitados¹³².

43. SRI dijo que Eritrea enfrentaba una rápida expansión de la pandemia del VIH/SIDA en los próximos años, que era posible que aumentara significativamente¹³³ el número de personas infectadas por el VIH y que el sistema de salud del país no estaba preparado para

encarar una evolución tan rápida¹³⁴. Recomendó que el Gobierno reservara algunos fondos estables para financiar proyectos de la sociedad civil en la lucha contra el VIH/SIDA y trabajara con los medios de difusión para definir el sida como enfermedad tratable y curable en lugar de un motivo de escándalo social o de estigma¹³⁵.

44. SRI recomendó al Gobierno que legalizara el aborto terapéutico, facilitara la atención médica, especialmente en las zonas remotas de Asmara, y asignara a médicas a las clínicas, pues las tradiciones hacían difícil para las mujeres visitar a ginecólogos hombres¹³⁶.

9. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad

45. En la comunicación conjunta 1 se consideró que el derecho a la educación se había visto perjudicado por dos políticas gubernamentales¹³⁷: la militarización y la homogeneización cultural. A partir de los grados 8º y 9º, los alumnos pasaban la mayor parte de sus vacaciones de verano en campamentos supervisados por el ejército y al servicio de empresas agropecuarias de propiedad del Gobierno. Todas las clases de 12º grado del país estaban en Sawa, que también era el principal campamento de entrenamiento militar del país. Puesto que los alumnos asociaban la educación con el servicio militar, muchos abandonaban los estudios, y hay sobrados incentivos para que los alumnos rindan poco y repitan cursos¹³⁸. En la comunicación conjunta 1 se informó de que la política gubernamental de igualdad entre los idiomas se veía obstaculizada por la falta de recursos y la tendencia del Gobierno a utilizar el tigríno como idioma oficial¹³⁹. En la comunicación conjunta 1 se solicitó al Gobierno que eliminara todas las actividades militares vinculadas a las vacaciones de verano y las reemplazara por actividades veraniegas voluntarias organizadas por el Ministerio de Educación¹⁴⁰.

10. Minorías y pueblos indígenas

46. En la comunicación conjunta 1 se señaló que al promover la política de "una nación, un pueblo", el Gobierno fomentaba la homogeneización cultural y denigraba el estilo de vida de las minorías¹⁴¹.

11. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

47. JC indicó que los eritreos huían del país por millares pese al riesgo de muerte y de las órdenes de "tirar a matar" sobre quienes cruzaran la frontera. La organización católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada disponía de nuevos datos sobre una crisis humanitaria en marcha en el Cuerno de África, ya que, según JC¹⁴², la población huía del país en busca desesperada de alimentos y refugio.

48. Según la comunicación conjunta 1, la mayoría de los refugiados que llevaban decenios languideciendo en países vecinos pertenecía a grupos prácticamente no representados en el Gobierno. Más de 150.000 refugiados eritreos seguían consumiéndose en campamentos de refugiados en un país vecino; alrededor de 30.000 habían vuelto a Eritrea con promesas de rehabilitación, pero la mayoría había regresado posteriormente a los mismos campamentos de refugiados debido a la naturaleza represiva del Gobierno¹⁴³.

49. CPTI declaró que en 2007 unos 36.000 eritreos habían presentado solicitudes de asilo, es decir, más del 6% de toda la población nacional, proporción que no se ha alcanzado en ningún otro sitio. Dijo que la mayoría de refugiados y solicitantes de asilo pretendía así eludir el servicio militar o desertar, y que Eritrea era el único país en el que la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio había convertido en refugiados a un número tan elevado de personas¹⁴⁴.

12. Desplazados internos

50. En la comunicación conjunta 1 se mencionó que los residentes del sur de Eritrea, a lo largo de una franja de 15 millas situada en la zona de amortiguación con un país vecino, se habían visto obligados a desplazarse, dislocar su vida y abandonar sus aldeas. Se señaló que la zona estaba sembrada de numerosas minas, lo cual constituía un peligro para la vida de la población¹⁴⁵.

51. Según la comunicación conjunta 1, el Gobierno ha emprendido recientemente el reasentamiento forzado de habitantes de las regiones de Guzai Akele y Seraye ("Zona Sur") en la región de Gash-Barka. Los habitantes de aldeas enteras están siendo forzados a abandonar sus tierras ancestrales, lo cual ha suscitado las quejas tanto de los desplazados como de los habitantes de la región de acogida. Esto a su vez puede ocasionar un conflicto entre comunidades¹⁴⁶.

III. Logros, prácticas óptimas, retos y limitaciones

N.A.

IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales esenciales

N.A.

V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica

N.A.

Notas

¹ The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental organization in consultative status with the Economic and Social Council.)

Civil society

AI	Amnesty International, London, United Kingdom*
CPTI	Conscience and Peace Tax International, Leuven, Belgium*
CSW/HRCE	Christian Solidarity Worldwide, Human Rights Concern – Eritrea, New Maldon, United Kingdom
EAJCW	The European Association of Jehovah's Christian Witnesses, Kraainem, Belgium
ECLJ	European Centre for Law and Justice, Strasbourg, France
EHDR-UK/RE	Joint submission by: Eritrean for Human and Democratic Rights-United Kingdom and Release Eritrea, United Kingdom
GIEACP	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London, United Kingdom
HRW	Human Rights Watch, Geneva, Switzerland*
IP	International PEN, London, United Kingdom*
IRPP	The Institute on Religion and Public Policy, Washington, DC, United States of America
JC	Jubilee Campaign, Fairfax, VA, United States of America
JS1	Joint Submission 1 is a coalition of: Eritrean Global Solidarity; Network of Eritrean Civil Societies-Europe; Suwera Center for Human Rights – Sudan; The Eritrean

community in Australia Inc; Eritrean Australian Mercy Association Inc; Awate Foundation

JS2 ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association); ILGA-Europe; Pan Africa ILGA; International Gay and Lesbian Human Rights Commission; ARC International

ODI Open Doors International, AA Harderwijk, The Netherlands*

OSJI Open Society Justice Initiative, New York, United States of America

SRI The Sexual Rights Initiative, Buenos Aires, Argentina

STP Society for Threatened Peoples, Gottingen, Germany*.

- ² JS1, p. 3, paras. 15 and 16.
³ HRW, p. 6.
⁴ OSJI, p. 6, para. 18.
⁵ JS1, p. 2, para. 7.
⁶ JS1, p. 2, para. 9.
⁷ JS1, p. 2, para. 8.
⁸ ECLJ, p. 1, para. I A.
⁹ ODI, p. 2.
¹⁰ HRW, p. 6.
¹¹ JS1, p. 3, para. 14.
¹² HRW, p. 6.
¹³ SRI, p. 1, para. 4.
¹⁴ SRI, p. 3, para. 13.
¹⁵ OSJI, p. 4, para. 12.
¹⁶ OSJI, p. 6, para. 18.
¹⁷ HRW, p. 2.
¹⁸ EDHR-UK/RE, p. 3, para. 11.
¹⁹ JS1, p. 4, para. 21.
²⁰ AI, p. 4.
²¹ HRW, p. 2.
²² AI, p. 4.
²³ HRW, p. 5.
²⁴ JS1, p. 5, para. 24.
²⁵ IP, p. 3.
²⁶ HRW, p. 2.
²⁷ HRW, p. 5.
²⁸ AI, p. 5.
²⁹ AI, p. 3.
³⁰ AI, p. 4.
³¹ IP, p. 2.
³² EDHR-UK/RE, p. 2, para. 8.
³³ HRW, p. 1.
³⁴ AI, p. 4.
³⁵ EDHR-UK/RE, p. 5.
³⁶ SRI, p. 2, para. 6.
³⁷ SRI, p. 2, para. 12.
³⁸ SRI, p. 2, para. 8.
³⁹ SRI, p. 2, para. 10.
⁴⁰ CPTI, p. 2, para. 4.
⁴¹ SRI, p. 2, para. 11.
⁴² SRI, p. 2, para. 12.
⁴³ GIEACP, p. 2, para. 1.1.
⁴⁴ GIEACP, p. 2, para. 1.4.
⁴⁵ GIEACP, p. 2, para. 1.2.
⁴⁶ GIEACP, p. 2, para. 1.3.
⁴⁷ HRW, p. 1.
⁴⁸ HRW, p. 2.

- ⁴⁹ EDHR-UK/RE, p. 1, para. 3.
⁵⁰ JS1, p. 5.
⁵¹ JS1, p. 4, para. 23.
⁵² EDHR-UK/RE, p. 1, para. 4.
⁵³ CSW/HRCE, p. 3, para. 6.
⁵⁴ EDHR-UK/RE, p. 5.
⁵⁵ JS1, p. 4, para. 24.
⁵⁶ JS1, p. 5.
⁵⁷ JS1, p. 6, para. 31.
⁵⁸ JS1, p. 6.
⁵⁹ JS1, p. 6, para. 30.
⁶⁰ JS1, p. 6.
⁶¹ JS2, p. 1.
⁶² JS2, p. 2.
⁶³ HRW, p. 4.
⁶⁴ AI, p. 5.
⁶⁵ AI, p. 3.
⁶⁶ ODI, p. 2.
⁶⁷ JC, pp. 1-2, paras. 5-9.
⁶⁸ IRPP, p. 1, paras. 1, 13-15 and 18.
⁶⁹ IRPP, p. 1, para. 1.
⁷⁰ HRW, p. 3.
⁷¹ EAJWCW, p. 3.
⁷² EAJWCW, p. 2.
⁷³ EAJWCW, p. 2.
⁷⁴ AI, p. 3.
⁷⁵ EAJWCW, p. 3.
⁷⁶ HRW, p. 5.
⁷⁷ IRPP, p. 2, para. 9.
⁷⁸ AI, p. 3.
⁷⁹ HRW, p. 3.
⁸⁰ IRPP, pp. 2-3, para. 10.
⁸¹ AI, p. 4.
⁸² ODI, p. 5.
⁸³ IRPP, p. 5, para. 23.
⁸⁴ IP, p. 1.
⁸⁵ AI, p. 4.
⁸⁶ JS1, p. 5, para. 28.
⁸⁷ IP, p. 2.
⁸⁸ AI, p. 4.
⁸⁹ IP, p. 2.
⁹⁰ AI, p. 4.
⁹¹ IP, p. 2.
⁹² AI, p. 5.
⁹³ CSW/HRCE, p. 3, para. 6.
⁹⁴ STP, p. 1.
⁹⁵ AI, p. 5.
⁹⁶ JS1, p. 5, para. 29.
⁹⁷ AI, p. 5.
⁹⁸ IP, p. 3.
⁹⁹ CSW/HRCE, p. 4, para. 12.
¹⁰⁰ JS1, p. 3, para. 10.
¹⁰¹ JS1, p. 3, para. 11.
¹⁰² JS1, p. 3, para. 12.
¹⁰³ JS1, p. 3.
¹⁰⁴ ODI, p. 5.

- 105 CSW/HRCE, p. 2, para. 9.
106 JS1, p. 2, para. 4.
107 HRW, p. 3.
108 CSW/HRCE, p. 4, para. 10.
109 AI, p. 4.
110 STP, p. 1.
111 EDHR-UK/RE, p. 5.
112 JS1, p. 6, para. 32.
113 JS1, p. 6, para. 36.
114 CSW/HRCE, p. 7, para. 28.
115 JS1, p. 6, para. 33.
116 JS1, p. 7.
117 CPTI, p. 1, para. 1.
118 JS1, p. 6, para. 34.
119 HRW, p. 5.
120 CSW/HRCE, p. 8, para. 33.
121 JS1, p. 6, para. 35.
122 CPTI, p. 4, para. 14.
123 CPTI, p. 4, para. 15.
124 CSW/HRCE, p. 6, para. 25.
125 HRW, p. 5.
126 CPTI, p. 5, para. 22.
127 CSW/HRCE, p. 9, para. 32.
128 CSW/HRCE, p. 7, para. 29.
129 CSW/HRCE, p. 7, para. 30.
130 EDHR-UK/RE, p. 3, para. 13.
131 EDHR-UK/RE, p. 5.
132 HRW, p. 6.
133 SRI, p. 4, para. 24.
134 SRI, p. 5, para. 26.
135 SRI, p. 5, para. 29.
136 SRI, p. 4, para. 21.
137 JS1, p. 7, para. 39.
138 JS1, p. 7, para. 40.
139 JS1, p. 7, para. 41.
140 JS1, p. 7.
141 JS1, p. 4, para. 17.
142 JC, p. 4, para. 13.
143 JS1, p. 8, para. 45.
144 CPTI, p. 4, para. 12.
145 JS1, p. 8, para. 48.
146 JS1, p. 8, para. 49.
-